



OSAL

Observatorio Social de América Latina
Publicación electrónica

Cronología del Conflicto Social

R

A

Consejo Latinoamericano
de Ciencias Sociales



CLACSO

Conselho Latino-americano
de Ciências Sociais

Documento de trabajo N° 228

***Realizado por
el Comité de Seguimiento
del Conflicto Social y la Coyuntura
Latinoamericana de R***



Integrantes Juan

Diarios *E*

Otras fuentes Espacio Insular

© Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales

Se autoriza la reproducción de los artículos en cualquier medio a condición de la mención de la fuente y previa comunicación al director.

La responsabilidad por las opiniones expresadas en los artículos, estudios y otras colaboraciones incumbe exclusivamente a los autores firmantes, y su publicación no necesariamente refleja los puntos de vista de la Secretaría Ejecutiva de CLACSO.

El **Observatorio Social de América Latina (OSAL)** constituye una iniciativa del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales (CLACSO) destinado a la promoción de estudios e investigaciones sobre los procesos de movilización y conflicto social, las dinámicas de participación y los repertorios de acción de movimientos sociales y organizaciones populares en los países latinoamericanos y del Caribe. El OSAL promueve el debate académico entre los investigadores e investigadoras sociales de la región. Además, estimula el diálogo entre las instituciones de investigación, las universidades y los movimientos sociales, sindicatos y organizaciones populares que actúan en la defensa de los derechos humanos y sociales.

La realización de una pormenorizada cronología mensual del conflicto social en 19 países de América Latina y el Caribe constituye una de las principales iniciativas desarrolladas por el OSAL. El documento aquí presentado constituye uno de los resultados de este trabajo de documentación y registro llevado a cabo en el marco del programa. Se trata de un documento de trabajo en el que se sintetizan las principales acciones de movilización y protesta social llevadas a cabo durante el mes indicado en uno de los 19 países relevados.

La cronología presentada ha sido elaborada por alguno de los diversos **Comités de Seguimiento del Conflicto Social** que conforman el OSAL, cada uno de los cuales, bajo la coordinación de un equipo de investigación que forma parte de la red institucional de CLACSO, lleva a cabo el trabajo de registro en uno o más países de la región.

Comités de Seguimiento del Conflicto y la Coyuntura Latinoamericana

PAIS	INSTITUCION	RESPONSABLES
Guatemala	FLACSO	Simona Yagenova Mario Castañeda
Colombia	Escuela Nacional Sindical	Guillermo Correa Diana Cárdenas
Paraguay	Centro de Documentación de Estudios	Quintín Riquelme
Ecuador	CIUDAD	Mario Unda Hugo González
Bolivia	CIDES – UMSA	Dunia Mokrani Chávez Pilar Uriona Crespo
Chile	ARCIS	Juan Carlos Gómez Leyton
Perú	Instituto de Estudios Peruanos	Ramón Pajuelo
Brasil	LPP	Roberto Leher
Argentina y Uruguay	PIMSA (Argentina)	María Celia Cotarelo
México	UNAM	Massimo Modonesi Lucio Oliver
Panamá, El Salvador, Nicaragua Honduras y Costa Rica	CELA (Panamá)	Marco A. Gandásegui, h.
República Dominicana y Puerto Rico	Centro Juan Montalvo (Rep. Dominicana)	Mario Serrano Juan Luis Corporán
Venezuela	PROVEA	Marino Alvarado Marco Antonio Ponce
Costa Rica	IIS	Carlos Sandoval

Costa Rica

Cronología del conflicto social

Septiembre de 2008

Lunes 1

Un grupo de ciudadanos realiza una declaración pública, en la cual indican que llevarán a cabo una manifestación frente a la Sala Constitucional contra una serie de medidas adoptadas por el Poder Judicial. Consideran que la intromisión del Poder Ejecutivo en el sistema judicial es una muestra de que los fallos dejaron de ser jurídicos y se convirtieron en fallos políticos. Además, manifestarán su repudio contra la jerarquía de la Iglesia Católica, porque según ellos es vergonzoso que se han hecho prestamistas y que sean dueños del 25% de las acciones del Grupo Sama, y pedirán que se despida al Magistrado Suplente Federico Sosto, entre otros.

La Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza (APSE) anuncia la realización de una huelga el próximo 8 de setiembre como movimiento de presión para exigir al gobierno cancelar un pago adicional de 6,42% a los docentes bachilleres. Además, reclaman el cumplimiento de un decreto firmado en 1.990 por el presidente Oscar Arias, en su primera administración (1.986-1.990), en el cual se estableció que los profesores recibirán los mismos incrementos y beneficios salariales que se les hagan a los profesionales del Título I.

Martes 2

Un grupo de vecinos de Los Guido en el cantón de Desamparados en San José realiza un bloqueo en los accesos a comunidades como Los Guido, La Capri, San Miguel, Higuito y Lomas, como forma de protesta por el mal estado de la carretera. Los vecinos de la comunidad indican que el mal estado de las vías hace que ni ambulancias ni taxis quieran ingresar a la zona. Según la alcaldesa de Desamparados, por ahora solo se puede dar una “solución cosmética” al problema, en espera de la cooperación china que se invertirá en mejora de la infraestructura vial.

Un grupo de oficiales de diversos centros penales se concentran en las afueras del Centro Penitenciario San Sebastián para entregar un documento en el que exigen un aumento salarial a la base de entre el 25% y el 40%. Además, exigen que se corrijan las jornadas excesivas y se frene el abuso de la disponibilidad ante la falta de personal. El pliego de peticiones es recibido por el Director General de Adaptación Social, Reinaldo Villalobos, quien pide un tiempo prudencial para dar respuesta a las peticiones y se compromete a hacer llegar el pliego hasta las máximas autoridades del Ministerio de Justicia (MJ).

La Red de Coordinación en Biodiversidad realiza una declaración pública para manifestar su oposición a la aprobación de la Ley de Semillas. De acuerdo a esta red de organizaciones sociales, la aprobación de la Ley de Semillas, por parte de la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales de la Asamblea Legislativa, constituye una apuesta por la defensa de los intereses de las grandes transnacionales de semillas, frente a los derechos de los pequeños productores locales

de semillas y de los agricultores nacionales. La Red de Coordinación en Biodiversidad critica la aprobación de la ley, ya que ésta fue aprobada sin las respectivas consultas a las organizaciones sociales. En la comisión legislativa en la que se aprobó este proyecto se realizaron consultas a las instituciones estatales y a las cámaras industriales, más no a los representantes de organizaciones campesinas o indígenas.

Estudiantes de 26 escuelas de la provincia de San José protestan frente a la Municipalidad de San José, debido a que desde hace un año los regidores impiden que ese municipio les gire un monto de 70 millones de colones para mejorar la infraestructura de estos centros educativos. Maureen Clarke, la alcaldesa suplente de San José, manifiesta que presentarán una moción para que los regidores acepten entregar ese dinero a las escuelas, pues los recursos en cuestión están disponibles.

Miércoles 3

Un grupo de manifestantes de diversos sectores sociales realiza una concentración en el circuito judicial en San José para exigir que los funcionarios de los diversos poderes de la República realicen sus labores basados en la ética. Además, reclaman que las decisiones judiciales dejen de ser políticas. Los últimos fallos de la Sala Constitucional con respecto al Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Centroamérica, República Dominicana y Estados Unidos, y el caso del Magistrado Sosto son casos que explican la demanda.

Los representantes de diversas organizaciones indígenas solicitan al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) la realización de una consulta a las comunidades del cantón de Buenos Aires, en la provincia de Puntarenas en torno al proyecto hidroeléctrico Diquís. Los integrantes de las comunidades indígenas de Térraba, Boruca y la zona de Curré se oponen a la propuesta de aprovechar el potencial hidroeléctrico de la zona de la cuenca del río Térraba, territorio ocupado por grupos indígenas. La realización de este proyecto implicaría el hundimiento de 6 mil has de las cuales 600 pertenecen a los indígenas de Térraba, China Kichá y Salitre, lo que significaría una pérdida del patrimonio indígena.

Las bandas musicales de algunas de las escuelas que pertenecen a la Junta de Educación de San José realizan un desfile por algunas de las calles de San José hasta llegar a la Municipalidad de San José, para reclamar a los regidores el giro de los dineros aprobado hace más de 2 años para reparar la infraestructura de algunos de los centros educativos. Según Heiner Méndez, presidente de la Junta de Educación de San José, de las 26 escuelas adscritas a esta Junta de Educación, hay 5 que tienen orden de cierre por parte del Ministerio de Salud (MINSAL). Éstas son las escuelas de Costa Rica, Omar Dengo, Ramiro Aguilar, García Flamenco y Castro Madriz.

Lunes 8

Profesores de distintos colegios realizan una marcha pacífica por San José para exigir un aumento salarial superior al aprobado por el Ministerio de Educación Pública (MEP). La manifestación la convoca la APSE y se realiza entre el Parque Central y la sede del

MEP. El gobierno ofrece un ajuste adicional del 5,96% a la base salarial de los docentes bachilleres y del 11,44% a quienes tengan título universitario de licenciado. Sin embargo, APSE alega que a los bachilleres se les debe pagar un ajuste mayor porque no se les aplicó un aumento del 6,42%, concedido por el Gobierno en el año 2006 a los bachilleres del sector público.

Miércoles 10

La Cámara Costarricense de la Construcción (CCC) denuncia el levantamiento de residencias en el bosque de la fila costeña del cantón de Osa, en la provincia de Puntarenas, así mismo señalan que esas viviendas están en la zona agrícola de Osa, la que se ubica en la parte alta de la fila costeña. El alcalde municipal comenta que las construcciones han venido a generar empleo en sectores donde la agricultura y la ganadería no están siendo rentables para los habitantes de las comunidades vecinas.

Jueves 11

Diversas agrupaciones indígenas del país solicitan a la Administración Arias Sánchez consultar a dichas organizaciones sobre la reforma del artículo 78 de la Ley de Biodiversidad. Esta reforma debe realizarse como parte de los compromisos asumidos por el país, en el marco del TLC. La solicitud de las agrupaciones indígenas se da una vez que la Sala IV emite una resolución en donde se obliga a la Asamblea Legislativa a consultar la reforma de dicho artículo de esta ley a las comunidades indígenas. La consulta debe realizarse al amparo del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT). De realizarse, la consulta sería un acto público en donde los integrantes de las comunidades indígenas, se manifestarían a favor o en contra de la reforma.

Viernes 12

Los vecinos de Progreso, Boruca, en la zona sur, exigen a las municipalidades de Buenos Aires y Osa construir un puente colgante sobre el río Térraba, ya que solo pueden cruzar en un bote de madera. Los vecinos afirman que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) ya hizo los diseños para construir un puente colgante que tendría 280 mts de longitud. No obstante, continúan a la espera de que los 2 gobiernos locales pongan en marcha la obra.

Martes 16

El Sindicato de Técnicos, Auxiliares y Asistentes Administrativos de Farmacias de la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), anuncia una huelga para el próximo 18 de setiembre en todas las farmacias de la institución. El sindicato reclama la eliminación de un acuerdo con las autoridades de la CCSS, el cual considera que no mejoraba las condiciones laborales de sus afiliados.

Vecinos del cantón de Escazú en San José, llevan 2 años solicitando la reparación de una calle de solo 600 mts. Los 18 propietarios del condominio Bello Horizonte afirman haber enviado múltiples solicitudes al gobierno local para gestionar el arreglo de la calle que tiene trechos transitables y otros solo para carros de doble tracción.

Viernes 19

Un grupo de pescadores asisten al Consejo de Gobierno, realizado en Puntarenas, para solicitarle al presidente Óscar Arias “que los dejen trabajar”. Ellos aprovechan la gira de Arias y su gabinete por esta ciudad. El presidente de la Cámara Nacional de la Industria Palangrera (CNIP), manifiesta que el sector pesquero está amenazado: “Hay amenazas de que no podemos pescar o exportar los picudos, llámense espada, vela, dorado y marlen. Una amenaza con un proyecto de ley en que se pide que se prohíba la exportación de aleta y otros derivados del tiburón, en lugar de buscar un mejor aprovechamiento”.

Sábado 20

Representantes de 5 pueblos indígenas de la región sur del país se reúnen en esta localidad, para estudiar los alcances de la resolución de la Sala Constitucional sobre el último de los proyectos de la agenda del TLC. Los pueblos indígenas costarricenses debieron haber sido consultados sobre varios artículos contenidos en el proyecto de ley que reforma las normas sobre propiedad intelectual. Mientras el gobierno y los diputados buscan cómo atender la orden de la Sala Constitucional de consultar a los indígenas el último plan requisito de la aprobación del TLC, líderes indígenas pretenden unificar su posición y hacerla valer en la capital.

Martes 23

Los vendedores ambulantes de San José protestan contra la Municipalidad. Ellos se reúnen a las 10 hs de la mañana en el Parque Central para marchar hacia el ayuntamiento, que se ubica en la avenida 10 de la capital. Los comerciantes conformaron un sindicato que agrupa –según afirman– a unas 300 personas. Desde inicios de agosto la Policía Municipal reforzó los operativos contra estas ventas, las cuales están prohibidas, lo que ha desatado una disputa callejera entre los representantes de la autoridad y los vendedores.

Miércoles 24

Una serie de organizaciones sindicales realizan una declaración pública en la que manifiestan a la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP) impedir el aumento del 46% en las tarifas eléctricas solicitado por el ICE. Las organizaciones sindicales indican que serán las familias asalariadas con ingresos medios y bajos quienes sufrirán las consecuencias del aumento. Además señalan que los culpables de

estos desproporcionados aumentos en tarifas de electricidad, han sido los políticos que le negaron al ICE los recursos para invertir en generación eléctrica.

Un grupo de ciudadanos en sillas de ruedas, conocidos como rentistas, realizan una protesta frente al Instituto Nacional de Seguros (INS) para reclamar un aumento en el monto de la pensión mensual que reciben por accidente laboral. Sergio Estrada, vocero de la Asociación de Lesionados Medulares por Riesgos del Trabajo, explica que debieron hacer la manifestación porque en el INS no quieren escucharlos, y mientras el presidente de la institución se aumenta un 70% el salario, a ellos les dan un 3% de aumento en la pensión.

Jueves 25

Un grupo de 40 transportistas independientes efectúan un bloqueo en el muelle de Puntarenas. Este bloqueo se hace para protestar contra un acuerdo del Consejo de Transporte Público (CTP) que impide a ese sector trasladar turistas desde ese muelle y el de puerto Caldera. La situación concluye luego de una reunión entre transportistas, la Cámara de Turismo, la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito.

Glosario de siglas

APSE	Asociación de Profesores de Segunda Enseñanza
ARESEP	Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos
CCC	Cámara Costarricense de la Construcción
CCSS	Caja Costarricense del Seguro Social
CNIP	Cámara Nacional de la Industria Palangrera
CTP	Consejo de Transporte Público
ICE	Instituto Costarricense de Electricidad
INS	Instituto Nacional de Seguros
MEP	Ministerio de Educación Pública
MINSA	Ministerio de Salud Pública
MJ	Ministerio de Justicia
MOPT	Ministerio de Obras Públicas y Transportes
OIT	Organización Internacional de Trabajo.
TLC	Tratado de Libre Comercio